



MEMORIA DE ANÁLISIS DE IMPACTO NORMATIVO (MAIN) DEL PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS REGULADORAS DE LAS AYUDAS INDIVIDUALES A FAMILIAS NUMEROSAS DE CATEGORÍA ESPECIAL, FAMILIAS CON HIJOS NACIDOS DE PARTO MÚLTIPLE Y FAMILIAS MONOPARENTALES.

JUSTIFICACIÓN DE LA MAIN ABREVIADA

Esta memoria se ha elaborado en atención a lo previsto en el artículo 53.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que requiere la elaboración de una memoria de análisis de impacto normativo, como documento que acompañará a todo anteproyecto de disposición de carácter general realizado por el órgano directivo.

Se ha optado por elaborar el modelo abreviado previsto en el apartado C (contenidos de la MAIN abreviada) de la Resolución de 13 de febrero, de la Secretaria General de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 6 de febrero de 2015, por el que se aprueba la Guía Metodológica para la elaboración de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, teniendo en cuenta que no se prevén impactos significativos derivados de la aplicación del Decreto propuesto.

A) FICHA RESUMEN.

1.- Órgano impulsor: Dirección General de Familias y Protección de Menores

2.- Consejería proponente: Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social

3.- Título de la norma: Decreto por el que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales.

4.- Fecha: 26 de mayo de 2020

5.- Oportunidad y motivación técnica: la pertinencia de estas normas reguladoras viene dada por la necesidad de establecer el régimen jurídico aplicable a las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales que se van a convocar este año en la Región de Murcia por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Situación que se regula: establecer las normas reguladoras para la concesión de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales, que se van a convocar este año en la Región de Murcia por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Finalidad del proyecto: este Decreto de normas reguladoras se encuadra dentro de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social con el propósito último de favorecer el afianzamiento de la institución de la familia como institución social básica que cumple un destacado papel en los ámbitos afectivo, educativo, económico y social, y en particular las familias cuya economía familiar se ha visto notablemente





afectada por su especial dimensión, debido a un parto múltiple o su condición de monoparental.

Novedades introducidas: Se trata de una regulación que parte de la Orden de 14 de noviembre de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (BORM n.º 266 de 17 de noviembre de 2018), por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias numerosas de categoría especial con 6 o más hijos, pretendiendo establecer por parte de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, una serie de modificaciones en el cuerpo de dicha Orden, fundamentalmente la inclusión de las familias monoparentales como sujeto receptor de ayudas, con la previsión de convocatoria de estas subvenciones en el presente ejercicio presupuestario, así como en los siguientes.

6.- Motivación y análisis jurídico: El objetivo de esta norma es establecer el régimen jurídico básico para la concesión de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales, que se van a convocar este año en la Región de Murcia por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Tipo de norma: Decreto de Consejo de Gobierno.

Competencia de la Comunidad Autónoma: la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ostenta la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social, en virtud de lo establecido en el apartado dos, letra e) del artículo 10.1.18 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.

Estructura y contenido de la norma: se estructura en 12 artículos, una disposición final única y una disposición derogatoria única y recoge las normas reguladoras para la concesión de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales, que se van a convocar este año en la Región de Murcia por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Normas cuya vigencia resulte afectadas: Orden de 14 de noviembre de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (BORM n.º 266 de 17 de noviembre de 2018), por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias numerosas de categoría especial con 6 o más hijos.

Trámite de audiencia: No se somete a trámite de audiencia.

Informes recabados: Es necesario recabar:

- Informe preceptivo del Consejo Asesor de Infancia y Familia, de conformidad con el artículo 15 a) del Decreto número 95/2004, de 24 de septiembre, por el que se crean y regulan los consejos asesores regionales de carácter sectorial de servicios sociales.





- Informe preceptivo del Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales, de conformidad con el artículo 3.a) del Decreto 37/1987, de 28 de mayo, por el que se regula el Consejo Regional de Servicios Sociales.
- Informe jurídico de la Vicesecretaría de la Consejería (art. 53 Ley 6/2004, de 28 de diciembre) con carácter preceptivo.
- Dictamen del Consejo Económico y Social, al establecerse como preceptivo por el artículo 5.a) de la Ley 3/1993, de 16 de julio, por la que se crea el Consejo Económico y Social., así como por el concordante artículo 11.1 a) del Reglamento de dicho Órgano Consultivo, aprobado por Orden de 24 de junio de 1994, al tratarse de un proyecto de Decreto del Gobierno Regional en materia social.
- Dictamen de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1.f) de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al tratarse de un proyecto de disposición general competencia del Consejo de Gobierno.

7.- Informe de impacto presupuestario: al tratarse de una norma que se limita a establecer un régimen jurídico básico de concesión de ayudas, carece de impacto presupuestario.

Repercusión presupuestaria: no implica por sí misma gasto o ingreso en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020.

En recursos de personal: ninguno

En recursos materiales: ninguno

8.- Informe de impacto por razón de género: debe valorarse como favorable, pues si bien no tiene una incidencia directa en la perspectiva de género, los beneficiarios últimos de las ayudas objeto de la norma son las familias, incluyendo tanto a hombres como a mujeres, sin que exista ningún tipo de distinción.

B) CONTENIDO

I. OPORTUNIDAD Y MOTIVACIÓN TÉCNICA

El objetivo perseguido con las previsiones contenidas en este proyecto de Decreto es establecer las normas reguladoras para la concesión de ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales, que se van a convocar este año en la Región de Murcia por la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social.

Dichas ayudas se configuran como aportaciones económicas que se conceden con carácter no periódico y se otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales destinadas a sufragar gastos determinados derivados de su composición y características.

La Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, considerando a la familia institución social básica, que cumple un destacado papel en los ámbitos





afectivo, educativo, económico y social, se ha propuesto la realización de actuaciones que contribuyan a afianzar dicha institución, consciente de las necesidades de realización personal de sus componentes en todos los ámbitos de la vida social.

Para atender con eficacia los objetivos propuestos, la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, estima como medida esencial la dotación de ayudas económicas destinadas a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales cuya economía familiar se ha visto notablemente afectada por este hecho, por lo que se considera oportuno no condicionar el pago de las citadas ayudas a la previa justificación del cumplimiento de su finalidad.

Sobre la naturaleza de las ayudas se ha pronunciado el Consejo Jurídico en su Dictamen 189/2006, recaído en el Anteproyecto de la Ley de Renta Básica, señalando en relación con las ayudas sociales que “una entrega de fondos públicos sin contraprestación directa, y que tenga una finalidad pública, no es encajable en el concepto de subvención del artículo 2.1 de la Ley 38/2003 si carece de la afectación al cumplimiento de un determinado objetivo que se impone al beneficiario a modo de carga. Para este otro género de actividad administrativa se ha predicado por la doctrina el concepto de ayudas o también el de “subvenciones impropias”, en las que la finalidad no es el fomento, sino la tutela social de situaciones de necesidad son ayudas vinculadas al status de los beneficiarios, sin perseguir a través de su otorgamiento ninguna actuación específica de éstos, ni estar fundado su otorgamiento en la previa realización de una actividad determinada”.

A la vista de lo dicho, podemos concluir que las ayudas no encajan en el concepto técnico de subvención por no cumplir el requisito establecido en el artículo 2, b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. Estaríamos en el terreno de las prestaciones asistenciales, en las que predomina la protección del individuo ante situaciones específicas de necesidad, no obstante lo cual, se hace necesario establecer las normas reguladoras y el procedimiento de concesión de dichas ayudas.

En esta línea, la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia establece en su artículo 2, apartado 4 que *“No se entenderán comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, regulándose por su propia normativa:*

a) *Las ayudas de carácter social concedidas por los organismos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que sean homologables o complementen las del sistema de Seguridad Social”.*

Es por ello que el preámbulo de esta propuesta normativa puntualiza que las ayudas objeto de la misma “no encajan en el concepto técnico de subvención por no cumplir el requisito establecido en el artículo 2, b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones” sino que *“estaríamos en el terreno de las prestaciones asistenciales, en las que predomina la protección del individuo ante situaciones específicas de necesidad, no obstante lo cual, se hace necesario establecer las normas reguladoras y el procedimiento de concesión de dichas ayudas”.*





II. MOTIVACIÓN Y ANÁLISIS JURÍDICO.

1º Competencia de la CARM sobre la materia.

El artículo 10.Uno.18 del Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de asistencia y bienestar social; desarrollo comunitario, política infantil y de la tercera edad; instituciones de protección y tutela de menores, respetando en todo caso la legislación civil, penal y penitenciaria; promoción e integración de los discapacitados, emigrantes y demás grupos sociales necesitados de especial protección, incluida la creación de centros de protección, reinserción y rehabilitación.

El artículo 22.b) de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia establece que “corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales la elaboración de anteproyectos y proyectos de disposiciones de carácter general y de cualquier otra normativa específica en materia de servicios sociales”.

El Decreto del Presidente nº 29/2019, de 31 de julio, de Reorganización de la Administración Regional, señala que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social tiene actualmente atribuidas las competencias en materia de promoción, protección y apoyo a la familia e infancia. En el mismo sentido, el Decreto nº 169/2019, de 6 de septiembre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, en su artículo 5 establece que corresponderá a la Dirección General de Familias y Protección de Menores las competencias relativas a la promoción, protección y apoyo a las familias e infancia, incluida la dirección en la elaboración de planes, programas y proyectos específicos en estas materias.

2º Base jurídica y rango del proyecto normativo.

El artículo 22.b) de la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, establece que le corresponde a la Consejería competente en materia de Servicios Sociales la elaboración de anteproyectos y proyectos de disposiciones de carácter general y de cualquier otra normativa específica en materia de servicios sociales.

Por otro lado, el artículo 52 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, establece que “La titularidad de la potestad reglamentaria corresponde al Consejo de Gobierno, en materias no reservadas por el Estatuto de Autonomía a la competencia legislativa de la Asamblea Regional. No obstante, los consejeros podrán hacer uso de esta potestad cuando les esté específicamente atribuida por disposición de rango legal o en materias de ámbito organizativo interno de su departamento, sin que la misma pueda ser objeto de delegación, en ningún caso”. No encontrándonos ante una materia de ámbito interno si no de incidencia directa sobre la ciudadanía ni existiendo habilitación legal expresa para la reglamentación mediante Orden directa de la persona titular de la Consejería, el proyecto normativo propuesto ha de revestir la forma de Decreto del Consejo de Gobierno. En este sentido, el artículo 25.2 de la Ley 7/2004, de 28 de diciembre, de organización y régimen jurídico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,





señala “Adoptarán la forma de Decreto, las disposiciones de carácter general, así como los actos emanados del Consejo de Gobierno, para los que estuviera expresamente prevista esta forma”.

3º Breve descripción del contenido y de la tramitación de la propuesta normativa

En cuanto a la **estructura** de la norma, el proyecto de Decreto de normas reguladoras consta de doce artículos, una disposición final y una disposición derogatoria:

- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Definición de las ayudas
- Artículo 3. Requisitos generales.
- Artículo 4. Requisitos específicos
- Artículo 5. Clases y cuantía máxima de las ayudas
- Artículo 6. Cómputo de Ingresos.
- Artículo 7. Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
- Artículo 8. Instrucción del Procedimiento.
- Artículo 9. Resolución, plazos y notificación
- Artículo 10. Obligaciones de los beneficiarios.
- Artículo 11. Reintegro de las Ayudas.
- Artículo 12. Alteración de las condiciones.
- Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
- Disposición final única. Entrada en vigor

En cuanto al **contenido** de las normas reguladoras propuestas, cabe señalar que

El artículo 1 de la propuesta de Decreto recoge el objeto de la misma (establecer las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias numerosas con categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales en la Región de Murcia), así como la definición que, a efectos de dichas normas reguladoras, se entiende por familia: el grupo formado por padres, tutores, acogedores e hijos, excluyendo ascendientes de los primeros y descendientes de los segundos, y la definición de lo que también a efectos de estas normas reguladoras se entiende por familia monoparental: la integrada por un ascendiente con uno o más hijos, siempre que no conviva con otra persona con la que constituya matrimonio o pareja de hecho excluyendo los ascendientes del primero y descendientes de los segundos.

La definición de las ayudas en el art 2 como aportaciones económicas que se conceden con carácter no periódico y se otorgan por una sola vez durante el ejercicio económico a familias con hijos nacidos de parto múltiple (considerando como tal el parto de tres hijos como mínimo y con edad inferior a seis años en el momento de la solicitud), a familias numerosas de categoría especial y a familias monoparentales destinadas a sufragar gastos determinados derivados de su composición y características.

Se establecen para los beneficiarios de las ayudas en los artículos 3 y 4 unos requisitos generales (reconocimiento de la condición de familia numerosa, excepto para las familias monoparentales; no tener acceso a otras ayudas de análoga naturaleza y para la misma finalidad; y residencia de la unidad familiar en la Región de Murcia) y unos específicos de cumplimiento alternativo y no acumulativo (el parto de tres hijos como mínimo y con edad inferior a seis años en el momento de la solicitud; ser familia





numerosa de categoría especial; ser familia monoparental en cuatro supuestos de hecho regulados por el artículo 4.3).

Se regula en el artículo 6 el cómputo de los ingresos de la familia a efectos de la valoración de la cuantía de las ayudas, que se realizará teniendo en cuenta la Base Imponible resultante en el último ejercicio fiscal de todos los miembros de la familia, ascendientes y descendientes que residan en el mismo domicilio, aunque excluyendo de este cómputo una serie de asignaciones, prestaciones y subsidios detallados en el apartado 4 de este precepto.

Se difiere en el art. 6 a la aprobación de la correspondiente convocatoria la determinación de las clases y cuantías máximas que podrán alcanzar estas ayudas.

Son objeto de regulación en los artículos 7 y 8 los requisitos y forma de presentación de solicitud de las ayudas, así como la instrucción del procedimiento, con una primera fase de admisión, en la que se examinará el cumplimiento por parte de las familias solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y específico contemplados en el presente Decreto, y una segunda relativa al estudio de las solicitudes.

En el artículo 9 se regula la resolución del procedimiento, plazos y notificación, destacando que la ayuda reconocida será abonada en un pago único mediante transferencia bancaria.

En el artículo 10, se recogen como obligaciones de los beneficiarios la de comunicar a la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social la obtención de ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administración o ente público o privado, y la modificación de cualquier circunstancia, la de someterse a las actuaciones de comprobación que pueda efectuar la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, la Intervención General de la Comunidad Autónoma en relación con las ayudas concedidas y el Tribunal de Cuentas, así como la de dar cumplimiento al resto de obligaciones específicas que se establecieran en la correspondiente convocatoria.

El artículo 11 regula los supuestos de reintegro de las ayudas, y por último el artículo 12 la posibilidad de modificación de la concesión en caso tanto de alteración de las condiciones que la determinaron como de obtención concurrente de ayudas para la misma finalidad otorgadas por otras administraciones o entes públicos, privados o concertados.

En cuanto a la **tramitación**, se han de seguir los trámites previstos para el ejercicio de la potestad reglamentaria en el artículo 53 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y del Consejo de Gobierno en la Región de Murcia.

Respecto de dicha tramitación, debemos de tener en cuenta que concurren razones graves de interés público derivadas de la necesidad de dar una urgente respuesta a las familias que, como consecuencia de la crisis sanitaria, económica y social que ha motivado la COVID-19, han visto en los últimos meses agravada o empeorada sustancialmente su situación, encontrándose en unas circunstancias que requieren de un apoyo inmediato por las Administraciones Públicas de modo que puedan cubrir sus necesidades más básicas e irrenunciables. Por todo ello se considera que en la





tramitación de este proyecto de norma propuesta debe realizarse con la mayor celeridad, evacuándose los correspondientes informes preceptivos en el menor plazo posible.

Asimismo, en cuanto a los trámites de consulta pública y trámite de audiencia, el artículo 133¹ de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas cuando concurren razones graves de interés público que lo justifiquen. Asimismo, el artículo 53.3.e) de la citada Ley 6/2004, de 28 de diciembre, establece con respecto al trámite de audiencia, sin que el mismo regule el trámite de consulta pública, la posibilidad de que se excluya el mismo por graves razones de interés público, acreditadas expresamente en el expediente. A la vista de lo expuesto en el párrafo precedente, consideramos que en la presente tramitación concurren graves razones de interés público que aconsejan la no realización de la consulta pública previa y del trámite de audiencia en la tramitación del proyecto de norma propuesto.

Debe señalarse no obstante que en la elaboración de la norma propuesta se ha de someter la misma a la consulta de las entidades representativas de los beneficiarios directos de la norma a través de la convocatoria del Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales y al Consejo Asesor de Infancia y Familia. A tal efecto se ha tenido en cuenta que el primero se configura según Decreto núm. 37/1987, de 28 de mayo, como órgano colegiado consultivo constituido con la finalidad de garantizar la participación de los distintos sectores sociales e institucionales en la planificación elaboración de normativa y organización de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y por su parte el Consejo Asesor de Infancia y Familia tiene encomendadas entre otras funciones la de conocer e informar con carácter preceptivo, no vinculante y previo a su consideración por el Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales, los proyectos normativos con rango de Ley, Decretos u otras disposiciones de carácter general, que se dicten en materias relacionadas con la familia y la infancia.

A la fecha de la presente Memoria, se han de recabar los siguientes informes o dictámenes:

- Informe preceptivo del Consejo Asesor de Infancia y Familia, de conformidad con el artículo 15 a) del Decreto número 95/2004, de 24 de septiembre, por el que se crean y regulan los consejos asesores regionales de carácter sectorial de servicios sociales.
- Informe preceptivo del Consejo Asesor Regional de Servicios Sociales, de conformidad con el artículo 3.a) del Decreto 37/1987, de 28 de mayo, por el que se regula el Consejo Regional de Servicios Sociales.
- Informe jurídico de la Vicesecretaría de la Consejería (art. 53 Ley 6/2004, de 28 de diciembre) con carácter preceptivo.
- Dictamen del Consejo Económico y Social, al establecerse como preceptivo por el artículo 5.a) de la Ley 3/1993, de 16 de julio, por la que se crea el Consejo Económico y Social., así como por el concordante artículo 11.1 a) del Reglamento de dicho Órgano Consultivo, aprobado por Orden de 24 de junio de 1994, al tratarse de un proyecto de Decreto del Gobierno Regional en materia

1 Declarado contrario al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) y c) de la Sentencia TC (Pleno) 55/2018 de 24 de mayo («B.O.E.» 22 junio), salvo el inciso de su apartado 1 "Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública" y el primer párrafo de su apartado 4.





social. De acuerdo con el artículo 7.2 de la citada Ley 3/1993, de 16 de julio, y al existir causas que demandan una urgente tramitación, dicho dictamen debería dictarse en el plazo máximo de 7 días naturales.

- Dictamen de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de Presidencia y Hacienda, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1.f) de la Ley 4/2004, de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, al tratarse de un proyecto de disposición general competencia del Consejo de Gobierno. De acuerdo con el artículo 22.2 del Decreto n.º 77/2007, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 4/2004 de 22 de octubre, de Asistencia Jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y al existir causas que demandan una urgente tramitación, dicho dictamen debería dictarse en el plazo máximo de 15 días.

4º. Listado de las normas cuya vigencia quede afectada por la norma que se pretende aprobar

Orden de 14 de noviembre de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades (BORM n.º 266 de 17 de noviembre de 2018), por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas individuales a familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias numerosas de categoría especial con 6 o más hijos

5º Necesidad de alta o actualización del servicio o procedimiento previsto en la disposición que se pretende aprobar en la Guía de Procedimientos y Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia.

El presente Decreto regula las normas reguladoras para la adjudicación de las ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias monoparentales, será preciso la modificación del procedimiento de adjudicación y justificación de Ayudas a familias con hijos/as de parto múltiple y familias numerosas de categoría especial, con seis o más hijos/as (código 2792) en la Guía de Procedimientos y Servicios de la Administración Pública de la Región de Murcia.

IV. INFORME DE IMPACTO PRESUPUESTARIO

Debe señalarse que el proyecto de Decreto de normas reguladoras que nos ocupa no lleva consigo impacto presupuestario alguno, toda vez que se limita a establecer los aspectos esenciales del régimen jurídico básico relativo a la concesión de las ayudas objeto de regulación, debiendo diferirse la evaluación del impacto presupuestario al momento en que se lleve a cabo la correspondiente convocatoria.

Asimismo, las normas reguladoras contenidas en la propuesta de Decreto no conllevan por sí mismas nuevas necesidades de personal. Ahora bien, la convocatoria para el ejercicio 2020 que parte de las mismas conllevará una serie de funciones adicionales a las hasta ahora asumidas por el órgano instructor, el Servicio de Familia. Dichas funciones son en su mayoría de naturaleza administrativa ya que en el procedimiento de instrucción se diferenciarán tres fases: una primera de admisión, en la que se examinará el cumplimiento por parte de las familias solicitantes de los requisitos formales y materiales de carácter general y específico, una segunda relativa al estudio de





las solicitudes que cumplan los requisitos y una tercera de propuesta de concesión o denegación.

Se prevé que con la convocatoria para este ejercicio 2020 se puedan conceder ayudas, como mínimo, a 170 familias lo que supone un incremento también como mínimo de 145 expedientes de concesión en comparación con la convocatoria del año 2018. Asimismo, se prevé un incremento del número de solicitudes al ampliarse el ámbito de aplicación. Así, por un lado encontramos que se amplía a todas las familias numerosas de categoría especial la posibilidad de solicitar las ayudas reguladas por la propuesta de Decreto, siendo a junio de 2020 dicho tipo de familias numerosas un total de 4.931 familias. Por otro lado, se ha ampliado en comparación con la normativa anterior como posibles beneficiarios de estas ayudas a determinados supuestos de familias monoparentales que requieren una especial protección, debiendo de tenerse en cuenta que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), a fecha 1 de enero de 2019 en la Región de Murcia existen un total de 56.400 familias monoparentales.

Por todo ello, se considera necesario que para la convocatoria del ejercicio 2020, derivada de las normas reguladoras contenidas en la propuesta de Decreto, el citado Servicio de Familia debe contar con un refuerzo de dos puestos de auxiliar administrativo que provendrán de la reorganización realizada por la Secretaría General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social en relación a puestos de las otras Direcciones Generales de la misma.

V. INFORME DE IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO

La Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad de Mujeres y Hombres y de Protección contra la Violencia de Género de la región de Murcia, introduce la obligatoriedad de que los proyectos de disposiciones de carácter general vayan acompañados de un informe sobre el impacto en función del género de las medidas que en ellos se establezcan.

El proyecto de Decreto que se remite tiene un impacto de género positivo en la medida se contempla la renta (los ingresos de la familia) como criterio esencial para la valoración de la cuantía de las ayudas.

En este sentido, ha de tenerse en cuenta que, de conformidad con la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el porcentaje de mujeres que se encuentran en un nivel de renta inferior a los 18.600,80 euros (ligeramente inferior a tres veces el IPREM) es significativamente mayor al de los hombres. En concreto, el 70,7% de las mujeres se encuentran en esta situación frente al 69,3% que representan los hombres, es decir, una diferencia de más de un punto porcentual. Asimismo, se observa que esas diferencias se acentúan para rentas inferiores. En supuesto de personas con renta inferior a 15.869,00 euros, en el caso de los hombres representan el 59,1%, mientras que en el caso de las mujeres representan el 60,9%, lo que supone una brecha en términos de renta próxima a dos puntos porcentuales.

Por ello, al ser un hecho contrastado que las mujeres disponen de unos niveles medios de renta inferiores a los de los hombres, cabe deducir que aquéllas resultarán preferentemente beneficiadas de la puesta en marcha de estas ayudas, por lo que Hemos de concluir por lo tanto que el impacto por razón de género de las medidas propuestas en la norma se ha de valorar como POSITIVO en relación con la igualdad de hombres y mujeres.





VI. OTROS IMPACTOS

Debe valorarse que el texto remitido tiene un impacto FAVORABLE en la familia, la infancia y la adolescencia, en la medida en que las ayudas reguladas por el Decreto objeto de la presente MAIN repercutirán positivamente en el bienestar material y emocional, socialización, motivación y autodeterminación tanto de familias en su conjunto, como en particular de los niños y adolescentes de aquellos colectivos desfavorecidos o en riesgo de exclusión social a los que dichos programas van dirigidos.

En la propuesta normativa son objeto de especial consideración las familias cuyos progenitores tengan reconocido un grado de discapacidad de al menos un 33 por ciento, y de otra parte, prevé que en el cálculo de ingresos de la unidad de convivencia a efectos del cálculo de las ayudas no se computen, entre otras, la asignación económica por hijo menor a cargo o mayor de 18 años con discapacidad, las prestaciones económicas del Sistema Murciano de Atención a la Dependencia ni los subsidios por ayuda de tercera persona y de movilidad y compensación por gastos de transporte. Todo lo anterior permite evaluar como FAVORABLE el impacto de la norma proyectada respecto del colectivo de las personas con discapacidad.

No existen otros impactos significativos en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Esta norma no afecta al acceso a actividades económicas en condiciones de mercado y su ejercicio por parte de operadores legalmente establecidos en cualquier lugar del territorio nacional, por lo que no entra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.

SUBDIRECTOR GENERAL DE JEFA DE SERVICIO DE FAMILIA
FAMILIAS Y PROTECCIÓN DE
MENORES

JOSÉ FRANCISCO TOVAR BERNABÉ

JOSEFA GARCÍA SERRANO

